

Santiago, seis de junio de dos mil veinticuatro.

Vistos:

En estos autos Rol N° C-2080-2021 del Primer Juzgado Civil de Talca, en procedimiento ordinario de indemnización de perjuicios, por sentencia de treinta de noviembre de dos mil veintidós, acogió la demanda deducida por Hugo Ávalos Navarro, Sergio Martínez Ahumada, Orlando Valenzuela Valenzuela, Carlos Bravo Lagos y Luz Caro Hernández, condenando al Fisco de Chile a pagar a los actores una indemnización de perjuicios por concepto de daño moral, de \$25.000.000 a los tres primeros, y de \$30.000.000 a los dos últimos, más los reajustes desde que la sentencia quede firme, sin intereses por no haber sido solicitados.

Impugnada esa decisión, la Corte de Apelaciones de Talca, por sentencia de nueve de mayo de dos mil veintitrés, confirmó la sentencia apelada, con declaración que se eleva la indemnización fijada para la demandante Luz Caro Hernández a la suma de \$90.000.000 y para cada uno de los demás demandantes en la suma de \$50.000.000, con costas del recurso.

Contra esa determinación, el Consejo de Defensa del Estado, en representación de la parte demandada, dedujo recurso de casación en la forma, el que se ordenó traer en relación.

Considerando:

1º) Que el recurso de casación formal se funda, en primer término, en la causal prevista en el N° 7 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, esto es, contener decisiones contradictorias. Fundamenta la causal invocada en que la sentencia de segundo grado reproduce íntegramente la sentencia en



alzada, y con ello, su fundamento 12°, en que el sentenciador a quo efectúa una graduación de las indemnizaciones conforme a la extensión de la privación de libertad sufrida por cada uno de los actores y la pérdida del embarazo que padeció la demandante Luz Caro Hernández, al tiempo que la sentencia objetada, en su fundamento primero, declara que la mayor o menor extensión de la privación de libertad que afectó a cada uno de los actores, resulta una discriminación improcedente ante crímenes de la misma naturaleza como las detenciones y torturas, materializándose una contradicción ante la ponderación o irrelevancia del factor “tiempo de privación de libertad”, en la fijación de las indemnizaciones, dentro de una misma sentencia, circunstancia que configura la causal de nulidad formal alegada.

2°) Que, como segundo vicio de nulidad formal, se alega que la sentencia de segundo grado incurre en la causal prevista en el artículo 768 N° 5 en relación 170 N° 4 del Código de Procedimiento Civil, al no contener las consideraciones de hecho o de derecho que sirvan de fundamento para aumentar a más del doble o al triple, el monto de las indemnizaciones determinadas por el tribunal de primer grado, lo que resulta evidente al analizar cada uno de los considerandos del fallo recurrido.

Asegura que los sentenciadores de alzada no consignaron una adecuada fundamentación que a lo menos permita conocer la reflexión particular que respecto a cada demandante, se han considerado para elevar en semejante magnitud la indemnización concedida, teniendo presente además que todos los actores, sin excepción, son beneficiarios de pensión por Ley 19.992 y otra serie de prestaciones por concepto de leyes de reparación.

Añade que dentro de las defensas y excepciones alegadas en contra de la demanda, se contaban, también, la de pago o reparación satisfactiva, pues



los actores son beneficiarios de las leyes de reparación y, de forma subsidiaria, la controversia vinculada a la valorización de los perjuicios traducida esta última, muy concretamente, en la necesidad de considerar, dentro de dicha regulación, las sumas indiscutidamente pagadas a los demandantes, a fin de evitar un enriquecimiento a favor de los mismos. Sin embargo, la sentencia recurrida omite formular todo género de reflexiones o consideraciones que tengan por objeto dar sustento a la decisión desestimatoria de estas últimas, radicando la totalidad de su raciocinio jurídico en la necesidad de reparación, al tiempo que no da razón suficiente para conceder el incremento, fijado en valores notablemente inferiores por el Tribunal a quo, en cuyos considerandos se apoya, al darlos por reproducidos.

En suma, dado que la sentencia objetada resolvió expresamente rechazar en su totalidad las excepciones y defensas opuestas a la demanda, elevando notablemente los montos concedidos como indemnización, puso a los sentenciadores en la obligación de consignar expresamente las razones que dieron sustento a dicha decisión, entre ellas, aquellas que explicaban los motivos por los cuales no se hizo lugar a las excepciones oportunamente opuestas en la contestación de aquella.

3°) Que, luego de mencionar los preceptos legales aplicables en la especie, el recurrente solicita se invalide el fallo impugnado en virtud de alguno o todos los motivos de casación expuestos y proceda a dictar sentencia de reemplazo que revoque la de primer grado, desestimando en todas sus partes la demanda, con costas o rebaje los montos concedidos, sin perjuicio de las facultades oficiosas de esta Corte Suprema.



4º) Que, para la adecuada inteligencia del arbitrio deducido, es preciso tener presente que como hechos indiscutidos, asentados en el fallo de primera instancia, resultaron los siguientes:

i. Los demandantes fueron detenidos y torturados con posterioridad al quiebre institucional ocurrido en el año 1973 en el país, por agentes del Estado, sometidos a privaciones de libertad fundadas en razones de tipo políticas e ideológicas, siendo en ese periodo torturados y sujetos a diversos vejámenes, en los términos precisados en su demanda. En particular:

a) **Hugo Humberto Avalos Navarro**, detenido el día 14 de septiembre de 1973 por cinco días, registrándose como víctima en la Comisión Valech, bajo el N°2249.

b) **Sergio Martínez Ahumada**, detenido el 12 de septiembre de 1973, por tres días, siendo reconocida su calidad de víctima por la Comisión Valech, bajo el N°14203.

c) **Carlos Bravo Lagos**, detenido el 02 de mayo de 1975, siendo trasladado a Villa Grimaldi y Tres Alamos, permaneciendo privado de libertad por tres años y siete meses, siendo reconocido como víctima en la Comisión Valech, bajo el N°3358.

d) **Orlando Valenzuela Valenzuela**, detenido el 03 de octubre de 1973 por un periodo de quince días.

e) **Luz Caro Hernández**, detenida el 13 de septiembre de 1973 por un mes y once días, practicándosele un aborto en ese periodo, siendo reconocida como víctima por la Comisión Valech, bajo el N°4544.

ii. Todos los demandantes recibieron beneficios pecuniarios directos, conforme a la Ley N°19.992 que estableció una pensión anual de reparación y otra serie de prestaciones por concepto de leyes de reparación.



5°) Que, abocándonos al examen del recurso de casación en la forma deducido por la parte demandada, en lo que respecta a la causal prevista en el N° 7 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, esto es, tener decisiones contradictorias, se debe consignar que aquella se refiere a la hipotética situación de contemplar el fallo impugnado una decisión que se opone a lo ordenado en ella misma, esto es, que existan dos dictámenes o determinaciones que recíprocamente se destruyen.

6°) Que del tenor de las argumentaciones expuestas en el libelo, resulta que los hechos en que se funda no constituyen el vicio de la causal invocada, por cuanto, como se dijo, aquél concurre sólo cuando una sentencia contiene decisiones imposibles de cumplir por contraponerse unas con otras, sin que tenga lugar cuando se incurra en contradicciones en sus consideraciones, toda vez que aquello, de existir, eventualmente constituye el vicio de nulidad previsto en el artículo 768 N° 5 en relación con el artículo 170 N° 4 del Código de Enjuiciamiento Civil, situación que se configura sólo si el fallo, producto de la referida contradicción, carece de fundamentos que sustenten lo resolutivo, por lo que el primer capítulo del recurso será desestimado.

7°) Que en cuanto al vicio invocado contemplado en el artículo 768 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, esto es, que el fallo haya sido dictado con omisión de los requisitos enumerados en el artículo 170 del mismo cuerpo legal, en particular aquellos consignados en su numeral cuarto, a saber, las consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento a la sentencia; procede tener en consideración que, como reiteradamente lo ha sostenido esta Corte, aquel vicio sólo concurre cuando la sentencia carece de las fundamentaciones fácticas o jurídicas que le sirven de sustento, mas no



tiene lugar cuando aquéllas existen pero no se ajustan a la tesis postulada por la reclamante, cual es la situación de autos.

8°) Que, en efecto, en el caso de marras la parte recurrente hace descansar esta aparente omisión de motivaciones, específicamente, en la falta de exposición de los fundamentos necesarios para decidir elevar las indemnizaciones determinadas por el tribunal a quo a más del doble o el triple, y las razones tenidas en consideración para rechazar la excepción de pago o reparación satisfactiva de los actores, aseverando que tal omisión priva de fundamento la decisión, pues por una parte rechaza las aludidas excepciones, al tiempo que decide aumentar sustancialmente las indemnizaciones determinadas.

En relación con este vicio, luego de examinada la sentencia de primer grado, que fuera reproducida por el fallo recurrido, y el tenor del recurso, debe concluirse que aquél no se ha configurado en la especie puesto que, a diferencia de lo que se afirma en el libelo de casación, la resolución que contiene la decisión impugnada, sí tiene las consideraciones de hecho y de derecho necesarias para arribar a la conclusión definitiva, siendo muy diferente que el contenido de las fundamentaciones del fallo no sean compartidas por el demandado, puesto que ello no las transforma en inexistentes.

9°) Que, en efecto, de la lectura de la sentencia recurrida es posible advertir que, a la luz de los hechos de la causa, los que por lo demás no fueron controvertidos entre las partes, los jueces efectuaron su ponderación, consignando las consideraciones de derecho que llevan al tribunal a decidir en la forma en que lo hizo.

Así, el fallo de primer grado en el motivo décimo, mantenido en la sentencia impugnada, contiene las consideraciones por las que la judicatura



del fondo desestimó la excepción satisfactiva opuesta, al considerar que éstas se basan en un catálogo de beneficios y asistencias, y no un régimen indemnizatorio por concepto de daño moral que tenga por objeto la reparación integral de todas aquellas personas que sufrieron atentados como los padecidos por los demandantes, por lo que los jueces del fondo no aprecian una incompatibilidad en el otorgamiento simultaneo de ambas, rechazando la excepción opuesta.

Por su parte, la sentencia recurrida, reproduce e hizo suyas las consideraciones expresadas en el motivo 12° de la sentencia de primer grado, a excepción de la distinción realizada por el a quo, en cuanto al periodo en que los demandantes permanecieron privados de libertad, elemento temporal expresamente descartado en el considerando 1° de la sentencia que se revisa, añadiendo factores que, sobre el particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha estimado concurrente en estos casos, considerando la naturaleza de los perjuicios causados a las víctimas de crímenes de Lesa Humanidad, esto es, *“la afectación que implica, en lo físico, psíquico y social dichos crímenes”*, y el derecho a una reparación integral que asiste a los demandantes, parámetros que -en virtud de la prudencia y equidad, aludida por el sentenciador de primer grado- llevan a la judicatura de segundo grado a fijar una indemnización que no puede ser inferior a cincuenta millones de pesos, a excepción de la demandante Luz Caro Hernández, determinada en noventa millones de pesos, *“atendido al objetivo hecho del mayor daño causado que se expresa en la pérdida de su embarazo”*.

10°) Que, sentado lo anterior, aparece que el mayor análisis que pretende la recurrente sólo dice relación con las argumentaciones y conclusiones que conforman el planeamiento que ella ha postulado, lo que



importa, consecuencialmente, que sus alegaciones constituyen más bien una crítica a las motivaciones contenidas en el fallo y no propiamente una fundamentación dirigida a comprobar y demostrar una o más inadvertencias, motivo por el cual no puede colegirse la omisión denunciada.

11º) Que finalmente, debe asimismo hacerse presente que, si bien la recurrente enuncia la falta de fundamentación jurídica en el fallo censurado, tal reproche no se apoya propiamente en la carencia de sustentación en ese sentido, no obstante lo cual procede advertir que de la simple lectura de la sentencia objetada, y la dictada por la judicatura de primer grado que reproduce, se aprecia la remisión a las disposiciones legales sobre las cuales basa su decisión, cumpliendo así con la exigencia impuesta por el legislador al efecto.

12º) Que, de este modo, del análisis de la sentencia que se censura se comprueba que ésta reúne todas y cada una de las exigencias que menciona el artículo 170 del Código de Enjuiciamiento Civil, especialmente aquella signada en el número 4 de la disposición aludida y que el demandante echa de menos, por lo que necesariamente ha de concluirse que ésta no adolece de la causal de anulación en comento.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 766, 768 N°5 y 7, 786 y 808 del Código de Procedimiento Civil, **se rechaza** el recurso de casación en la forma deducido por el Consejo de Defensa del Estado, en contra de la sentencia de nueve de mayo de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones de Talca en sus autos Rol 34-2023, la que **no es nula**.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Ministra Sra. Letelier



Rol N° 105.093-2023

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Llanos S., la Ministra Sra. María Teresa Letelier R., y los Abogados Integrantes Sra. Pía Tavorari G., y Sr. Eduardo Gandulfo R. No firma el Abogado Integrante Sr. Gandulfo, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ausente.



En Santiago, a seis de junio de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

